

Terminó el Mundial y regresó la realidad: Ruffo sacude al PAN, los partidos pierden recursos y el IMSS enfrenta el reto de 700 mil empleos

Con el torneo fuera de la agenda, México vuelve a mirar sus expedientes más incómodos. El exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel fue enviado a prisión preventiva por una investigación de contrabando de combustibles; PRI y PT enfrentan fuertes recortes por multas y la llegada de dos nuevos partidos; Morena reorganiza su estructura rumbo a 2027; y el sistema de seguridad social recibe una advertencia contundente: para reducir de manera significativa la informalidad, el país tendrá que generar más de 700 mil empleos formales cada año.

El Mundial terminó y, con él, también se agotó la pausa política. Las fotografías de estadios, visitantes y ceremonias internacionales ceden su lugar a una agenda marcada por investigaciones judiciales, disputas partidistas y un mercado laboral que todavía mantiene a más de la mitad de sus trabajadores fuera de la seguridad social.

El primer golpe cayó sobre el PAN. Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, permanecerá en prisión preventiva mientras se determina su situación jurídica por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La FGR lo vincula con una red que habría utilizado empresas, documentación irregular y operaciones comerciales para introducir combustibles sin pagar correctamente los impuestos correspondientes.

La investigación gira alrededor de Ingemar, compañía donde Ruffo tiene participación accionaria. Documentos de la Secretaría de Energía muestran que la empresa intentó obtener en 2020 un permiso para importar 3 mil 600 millones de litros de hidrocarburos por un valor estimado de mil 872 millones de dólares. El trámite fue rechazado porque la compañía no acreditó contratos propios, infraestructura suficiente ni una relación comercial válida con varias de las empresas cuyos documentos presentó.

La Fiscalía sostiene que no se trata de una irregularidad administrativa aislada, sino de una estructura de contrabando. La defensa y distintos actores opositores cuestionan la ruta judicial seguida para obtener las órdenes de aprehensión y advierten que el caso coincide con el calendario político. El expediente deberá resolver ambas dudas: si existió participación penal y si el proceso se condujo con estricto apego a derecho.

La política, como era previsible, ya tomó el control de la narrativa. Morena presenta la detención como el derrumbe del discurso panista contra la corrupción. El PAN habla de persecución y justicia selectiva. El debate corre el riesgo de repetirse bajo la vieja fórmula

mexicana: cada partido exige castigo para sus adversarios y debido proceso para sus aliados.

La verdadera prueba será otra. Si la investigación es sólida, tendrá que identificar a operadores, empresas, funcionarios aduanales, beneficiarios financieros y autoridades que permitieron las operaciones. Un caso de esta magnitud no puede terminar únicamente con una figura política en prisión preventiva. Si la red fue real, seguramente no funcionó con ocho personas y mucha buena suerte.

Mientras PAN y Morena se enfrentan por Ruffo, todos los partidos empiezan a sentir otro tipo de presión: menos dinero. La incorporación de Somos México y Partido PAZ obligó al INE a redistribuir el financiamiento público durante el segundo semestre. La bolsa no creció; ahora se divide entre más participantes.

El PRI es uno de los más afectados. Después de los ajustes y multas, recibió en julio cerca de 60.8 millones de pesos, alrededor de 21 millones menos de lo originalmente previsto. El PT quedó con aproximadamente 41 millones, también golpeado por sanciones. Morena perderá más de 52 millones durante el resto del año y Movimiento Ciudadano cerca de 19 millones.

La reducción llega cuando las fuerzas políticas ya se preparan para 2027. Menos recursos significan menos margen para estructura territorial, comunicación, capacitación y organización. También elevan el riesgo de que algunos partidos busquen compensaciones mediante gobiernos locales, asociaciones, promoción indirecta o financiamiento privado difícil de rastrear.

Los nuevos partidos enfrentan el desafío inverso. Tendrán recursos, pero no necesariamente estructura. Somos México y PAZ deberán construir comités, seleccionar candidatos y demostrar que son organizaciones nacionales, no simples plataformas creadas alrededor de dirigentes conocidos. Además, tendrán que alcanzar el 3% de la votación para conservar el registro.

Morena también mueve piezas. La salida de Héctor Díaz-Polanco de la dirigencia capitalina abre una reorganización en la ciudad con mayor peso político, presupuestal y electoral del país. La nueva conducción tendrá que recomponer la relación con PT y Verde, ordenar las aspiraciones locales y evitar que la competencia por alcaldías y diputaciones fracture al bloque gobernante.

Fuera de los partidos, el dato más importante del día se encuentra en el mercado laboral. Un análisis del Infonavit estima que México necesita generar más de 700 mil empleos

formales cada año para reducir la informalidad a 45% en 2040. Mantener el promedio histórico de 473 mil plazas sólo permitiría bajarla aproximadamente a 50%.

La diferencia parece técnica, pero representa millones de vidas. En mayo, alrededor de 33.4 millones de personas trabajaban sin seguridad social, prestaciones o protección legal completa. Son trabajadores que pueden enfermar sin ingreso garantizado, sufrir un accidente sin cobertura, llegar a la vejez sin pensión suficiente o perder el empleo sin indemnización efectiva.

El IMSS registra más afiliados que nunca, pero la cifra absoluta no resuelve el problema. La población económicamente activa también crece y una parte de las nuevas altas corresponde a trabajadores de plataformas que ya realizaban actividades económicas antes de ser incorporados al sistema.

Formalizar es un avance, pero no es lo mismo que crear empleo. Tampoco basta con aparecer un mes en el registro. El verdadero valor está en conservar la afiliación, cotizar con el salario correcto y tener acceso permanente a servicios médicos, incapacidades, riesgos de trabajo, vivienda y pensión.

El final del Mundial ofrece un buen ejemplo. El Gobierno capitalino calculó que el torneo generó hasta 100 mil plazas laborales y una derrama de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos. El dato puede ser positivo, pero necesita una segunda revisión: cuántos de esos empleos continuarán después de julio y cuántos fueron temporales.

Una plaza que dura seis semanas mejora la estadística del evento. Una plaza permanente mejora una vida y fortalece financieramente al IMSS.

La discusión también obliga a los sindicatos a replantear su estrategia. Históricamente, las organizaciones laborales han defendido a trabajadores de empresas formales, industrias y dependencias públicas. El desafío actual está en los millones que laboran fuera de esas estructuras: repartidores, conductores, prestadores de servicios, trabajadores independientes, empleados de micronegocios y personas contratadas por periodos breves.

El sindicalismo que no logre representar ese nuevo mercado laboral puede conservar siglas, edificios y congresos, pero perderá capacidad de transformar la realidad. La oportunidad está en crear modelos de afiliación flexibles, defensa jurídica, negociación colectiva digital y servicios útiles para trabajadores que no comparten un centro laboral tradicional.

El país entra así en una etapa menos espectacular que el Mundial, pero mucho más decisiva. El caso Ruffo pondrá a prueba la independencia y solidez del sistema de justicia. Los recortes partidistas mostrarán qué organizaciones tienen estructura real y cuáles dependen del financiamiento público. Morena deberá procesar su reorganización sin romper alianzas. Y el IMSS necesitará más que cifras récord para sostener la seguridad social.

La pregunta central ya no es quién ganó el torneo ni cuánto dejó la fiesta. La pregunta es si México puede convertir la actividad temporal en empleo permanente, las investigaciones en justicia imparcial y la competencia política en instituciones más sólidas.

Porque terminó el Mundial, pero comenzó el partido que realmente importa: el de un país que necesita crecer, formalizar el trabajo y evitar que la justicia se convierta en otra camiseta partidista.